



Sociohistórica, n° 43, e073, marzo-agosto 2019. ISSN 1852-1606
 Universidad Nacional de La Plata.
 Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación.
 Centro de Investigaciones Socio Históricas

Un barco que se hunde. La crisis de la Convertibilidad y la acción política de la Sociedad Rural Argentina (1998-2001)

A sinking boat. The Convertibility crisis and the political action of the Sociedad Rural Argentina (1998-2001)

Nicolás Pérez Trento

Universidad Nacional de Quilmes (UNQ),

Becario Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), Argentina

nicolasperetzrento@hotmail.com

RESUMEN:

En este trabajo analizamos la acción política de la Sociedad Rural Argentina durante los años de la crisis de la Convertibilidad, deteniéndonos específicamente en el devenir del vínculo entablado con los gobiernos neoliberales, así como en la relación entablada con otras organizaciones. Para la reconstrucción y análisis de dicha acción nos valdremos de fuentes documentales de dos tipos: por un lado, publicaciones de la propia asociación; por el otro, notas aparecidas en diarios de tirada nacional. Una de las principales conclusiones que emergen de este análisis refiere a las múltiples tensiones que atraviesan el accionar de la entidad tras el desencadenamiento de la crisis. En efecto, aunque su defensa del régimen de la Convertibilidad jamás menguó, su vínculo con los gobiernos neoliberales, la relación entablada con otras organizaciones, e incluso algunos aspectos de su ideología liberal entraron en tensión en este complejo escenario.

PALABRAS CLAVE: Sociedad Rural Argentina, Neoliberalismo, Convertibilidad, Acción política, Terratenientes.

ABSTRACT:

In this paper we focus on the political action of the Sociedad Rural Argentina along the Convertibility crisis period. We will specifically analyze the development of the link between that organization and the national administration, as well as the relation with other organizations. To this end, we will seek to rebuild the series of political actions undertaken by this entity by two different sources, namely its own publications and newspaper articles. As main results, stands out the tensions emerged in its political action due to the crisis unleash. Despite the organization never ceased to support the Convertibility regime, its ties with the neoliberal administrations, the relationship held with other organizations, and even some aspects of its economic liberalism were strongly tensioned in this complex scenario.

KEYWORDS: Sociedad Rural Argentina, Neoliberalism, Convertibility, Politicalaction, Landlords.

1. INTRODUCCIÓN

Como han notado numerosos autores, la implementación y consolidación del llamado “modelo neoliberal” suscitó el rechazo de distintos sectores de la sociedad argentina. Específicamente en lo que refiere a la rama agraria, el período estuvo caracterizado por una elevada conflictividad (Azcué Ameghino, 2004). La SRA se constituyó en una excepción a esta tendencia. En efecto, no sólo acompañó desde el primer momento la ejecución de dicho programa económico, sino que accionó también para consolidar su avance.

Durante los primeros años de la década de 1990, sin embargo, la producción agraria mostró pocas señales de recuperación. En este marco, las acciones de protesta recrudecerían: tras los paros de 1991 y 1992, Federación Agraria Argentina (FAA), Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) y Confederación Intercooperativa Agropecuaria Limitada (CONINAGRO) realizarían uno nuevo el año siguiente, acompañado de una marcha a Plaza de Mayo. En 1994, estas entidades realizaron otro paro de diez días de duración, que tuvo un acatamiento masivo. Si bien la SRA se abstuvo de unírseles, comenzó a reclamar con energía creciente

Recepción: 5 octubre 2016 | Aprobación: 7 septiembre 2018 | Publicación: 15 marzo 2019

Cita sugerida: Pérez Trento, N. (2019). Un barco que se hunde. La crisis de la Convertibilidad y la acción política de la Sociedad Rural Argentina (1998-2001). *Sociohistórica*, 43, e073. <https://doi.org/10.24215/18521606e073>



Esta obra está bajo licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.es_AR

medidas compensatorias, aunque sin abandonar jamás su apoyo a los lineamientos generales de la política económica (Pérez Trento, 2015; 2017a).

En los años siguientes, la conflictividad en la rama se relajó temporariamente. En buena medida la explicación puede hallarse en los vaivenes del mercado mundial: entre 1995 y 1997 los precios de los granos registraron breves pero fuertes alzas tras un lustro de relativo estancamiento, mientras que los volúmenes exportados de carne vacuna también se expandieron en relación a años previos.

Estos indicadores comenzaron a revertirse hacia 1998, al tiempo que volvía a acelerarse el proceso de concentración y centralización del capital, que entre 1988 y 2002 arrasaría con más de la cuarta parte de las explotaciones en la región pampeana. La propia Convertibilidad, por su parte, entró en una crisis que se revelaría terminal.

En este escenario, el ciclo de protestas agrarias se reanudaría, impulsado por las asociaciones ya mencionadas. La SRA volvía a hallarse entonces en una posición compleja: por un lado, se veía en la necesidad de exigir medidas para paliar la crisis; por el otro, seguía procurando accionar en favor del sostenimiento de la forma neoliberal que había tomado el proceso nacional de acumulación de capital.

Dado el papel que juega la renta de la tierra en dicho proceso, el análisis de la acción política de la SRA cobra especial importancia, en la medida en que representa a la fracción más concentrada de los terratenientes pampeanos (de Palomino, 1988). En efecto, el espacio argentino de acumulación de capital se caracteriza por la presencia de una gran cantidad de pequeños capitales, principalmente de origen nacional, que conviven con fragmentos de capitales de tamaño normal, en su mayoría de origen extranjero. Estos últimos, sin embargo, producen localmente sólo para el pequeño tamaño del mercado interno, o, si exportan, lo hacen generalmente a través de regímenes especiales de promoción. Dicha restricción en la escala implica que la productividad del trabajo que ponen en marcha es sustancialmente menor a la normal, a saber, la que son capaces de lograr en otros ámbitos nacionales, en los cuales producen para el mercado mundial. De aquí que la tasa de ganancia obtenida localmente sobre esta base sea igualmente menor a la normal. Sin embargo, estos capitales han contado históricamente con distintas fuentes de compensación, entre las que destaca la apropiación de fracciones de renta de la tierra (Iñigo Carrera, 1998; 2007; Starosta y Grinberg, 2014; Caligaris, 2017b). En este sentido, si bien en algunos de dichos mecanismos la riqueza apropiada circula en primer lugar por las arcas del Estado para posteriormente seguir su curso (como en el caso de las retenciones a la exportación), en otros la apropiación sigue una vía indirecta¹. Tal es el caso de la sobrevaluación de la moneda, que se consolida como la principal forma de apropiación tras la sanción de la Ley de Convertibilidad en 1991 (Iñigo Carrera, 1998; 2005).

En este marco, nos proponemos detenernos en la acción política que desempeñó la SRA en los años de crisis y derrumbe del esquema de la Convertibilidad. Específicamente, procuraremos mostrar cómo dicha acción, orientada hacia el sostenimiento del esquema neoliberal, fue tensionada desde distintos ángulos tras la irrupción de la crisis. Asimismo, plantearemos que esta orientación encierra una contradicción. En efecto, desde principios de la década la SRA accionó en función de la liquidación de los mecanismos de apropiación de renta de la tierra por parte de los capitales del sector industrial (Pérez Trento, 2017a). Pero tanto allí como cuando el neoliberalismo comenzó a entrar en lo que sería su crisis terminal, la SRA buscó preservar el régimen de la Convertibilidad, que daba forma la sobrevaluación por la cual la clase terrateniente dejaba escapar gran parte de la renta de la tierra. Procuraremos, por tanto, avanzar también en el análisis de esta cuestión.

Lo haremos mediante el uso de fuentes documentales de dos tipos. La primera refiere a documentos de la entidad, entre los que trabajaremos con la *Revista Anales*, que suele reflejar su posición política respecto de la coyuntura, y la publicación anual *Memoria y Balance*, que contiene análisis económicos, recopila las intervenciones políticas de la asociación, y sintetiza algunos aspectos relevantes sucedidos en la Asamblea Ordinaria. Asimismo, utilizaremos también notas publicadas en diarios, lo que nos permitirá recabar mayor información respecto de sus acciones.

Antes de avanzar en esa dirección, nos detendremos brevemente en algunos aspectos generales del rol desempeñado por las distintas asociaciones de capitalistas y terratenientes en el marco de la crisis de la Convertibilidad, y haremos hincapié en los análisis referidos a la SRA.

2. CAPITALISTAS Y TERRATENIENTES EN LA CRISIS DE LA CONVERTIBILIDAD

El rol de las asociaciones de capitalistas y terratenientes en la crisis de la Convertibilidad ha sido ya objeto de debate. En particular, tras la desintegración del Grupo de los 8 (G-8) y la posterior conformación del Grupo Productivo (GP), timoneado por la Unión Industrial Argentina (UIA), la acción política de estos actores en relación a la crisis ha sido interpretada de distintas formas. Al respecto, Basualdo (2001; 2002; 2003) plantea la existencia de una división de los capitalistas en dos bloques, de los cuales uno habría presionado por la devaluación mientras que el otro lo habría hecho en favor de la dolarización. Otras investigaciones también plantean esta dicotomía, aunque matizando en ocasiones el rol de los capitalistas y sus asociaciones (Castellani y Schorr, 2004; Castellani y Szkolnik, 2011). Por su parte, Salvia (2014b; 2014c) argumenta que la evidencia empírica para sostener dicha hipótesis es débil, y plantea en su lugar que la generalidad de los capitalistas mantuvo su apoyo a la Convertibilidad incluso a lo largo de la crisis, aunque se diferenciaron en las alternativas propuestas para gestionarla: mientras que uno de los bloques, en el que se alistaban los capitales financieros y de servicios públicos, procuró desarrollar aún más la política de ajuste fiscal y expansión del endeudamiento, el otro, comandado por el GP, presionó por una salida que beneficiara a los capitales del sector industrial. En particular, Merino (2014) ha planteado que la acción del GP apunta específicamente a la necesidad de estos capitales de reproducir las condiciones en las que prosperaron, particularmente la protección del mercado interno y la promoción estatal, y destaca al respecto el hecho de que, desde el punto de vista de la acumulación a escala mundial, los capitales allí aglutinados poseen una magnitud relativamente pequeña.

Respecto de la SRA, algunos trabajos han puesto el foco en su accionar a lo largo del período neoliberal en su conjunto. En este sentido, Heredia (2003) subrayó algunas de las consecuencias derivadas del apoyo que la asociación brindó al gobierno menemista, y enfatizó tanto en la ruptura con sus fundamentos identitarios (que resume en antiperonismo, tradicionalismo y liberalismo económico) como en el quiebre del consenso entre sus dirigentes. Por su parte, Muro de Nadal (2009) enfatizó en la interacción con dicho gobierno y la incapacidad mostrada por la organización para defender adecuadamente los intereses de los sujetos sociales que representó a lo largo de toda la década. Otros trabajos han indagado en períodos más breves. En particular, los primeros años del gobierno menemista han sido analizados en el trabajo de Pérez Trento (2017a), en donde se analizan algunos aspectos específicos de la acción política de la SRA. Allí se analiza el sentido de su acción política, indagando en el vínculo entablado tanto con otras asociaciones como con el gobierno, y se ponen de manifiesto los intentos de liquidar algunos de los mecanismos de apropiación de renta de la tierra, destacando su dificultad para enfrentarse a la sobrevaluación de la moneda determinada por la Convertibilidad, cuestión sobre la que volveremos hacia el final de este trabajo. En lo que refiere específicamente a la crisis de la Convertibilidad, Gálvez (2012) afirma que la acción de la SRA es “confusa y ambivalente”, lo que atribuye a la dificultad para alinearse con fracciones del capital al momento de elaborar consensos para posicionarse de cara a la crisis. Específicamente, este autor retoma los cuestionamientos vertidos por miembros de la CD hacia las empresas privatizadas y los capitales bancarios y petroleros, que se habrían constituido como algunos de los soportes fundamentales del “modelo”, así como a los capitales nucleados en el GP, quienes promovían una salida industrialista de la crisis. Esta posición política intermedia, señala, acabó operando en el sentido del sostenimiento de la Convertibilidad, ya que la SRA nunca llegó a enarbolar una posición crítica.

Por otra parte, para dar cuenta del accionar de este tipo de organizaciones se hace necesario avanzar en el análisis de la estructura social que les da sustento. Reviste especial relevancia, en este sentido, el vínculo entre las clases terrateniente y capitalista. Al respecto, Basualdo (2006; 2008) ha sugerido la existencia de

una simbiosis entre los propietarios del capital más concentrado y de grandes extensiones de tierra, sector social al que refiere como “oligarquía diversificada”. La metodología y supuestos sobre los que se sustentan sus trabajos, sin embargo, han sido sometidos a distintas críticas (Lattuada, 1994; Barsky, 1997; Caligaris, 2017a)². En contraposición a esta hipótesis, otros autores han planteado que la propiedad de la tierra se ha subdividido desde principios del siglo XX, proceso que no habría dado lugar a una multiplicación de pequeñas unidades sino al engrosamiento de las que se ubican en el medio de la escala, esto es, a un fenómeno de “concentración sin dispersión” (Barsky y Pucciarelli, 1991). A lo largo del período de la Convertibilidad, por otra parte, avanzó velozmente el proceso de concentración y centralización del capital agrario: entre los años 1988 y 2002 no sólo aumentó marcadamente el tamaño promedio de las unidades de producción, sino que fue barrida más de la cuarta parte de las que se ubicaban en la región pampeana.

3. LA SRA EN LA CRISIS DE LA CONVERTIBILIDAD

En el contexto ya descrito, nos enfocaremos en lo que sigue en la acción política de la SRA durante la crisis de la Convertibilidad. Interesa avanzar, especialmente, en el devenir del vínculo entablado con los sucesivos gobiernos, así como en los vaivenes de la relación que trazó tanto con las restantes organizaciones agrarias como con las que representan a capitalistas del sector industrial.

3.1. La irrupción de la crisis

La relación entre la SRA y el gobierno menemista comenzó a tensarse a principios de 1998, a medida que despuntaba la crisis. Ya en febrero, la entidad había recibido de muy mala forma la presentación oficial de un proyecto de ley para modificar nuevamente el IVA agropecuario, sugiriendo no sólo que incrementaría la evasión fiscal, sino que también la medida obedecía simplemente a un exceso de gasto público. Asimismo, denunció que la propuesta encerraba un engaño:

Casi inerte frente a la falta de decisión política de sancionar efectivamente a los presuntos evasores, [la DGI] recurrió al facilismo de sugerir una medida que intentó presentar como una concesión a la producción: la baja de la alícuota del IVA a la primera venta agropecuaria. Esta propuesta (...) no significa otra cosa que continuar pagando el 21 % en las compras y cobrar el 10,5 % en las ventas (...). Se dice que tenemos un crédito fiscal que de alguna manera nos será devuelto, pero la historia dice que eso no es así (...). Este proyecto no reduce un impuesto a la producción, crea un impuesto nuevo (...). La pretendida medida tiene un claro sesgo antiproductivo, configurando un nuevo intento de discriminación sobre el sector, y actúa como un desincentivo para la inversión (SRA, 1998a, p. 3).

La protesta, como se ve, adopta duros términos. Ante la reaparición del déficit fiscal vuelve a insistir sobre la necesidad de bajar el gasto público y retoma las acusaciones de “discriminación” al campo, poco tiempo después de haber afirmado que el gobierno menemista había puesto fin a dicha política³. El escenario se ponía aún más negro con la renovación de los intentos por privatizar al Banco Nación, que concentraba la mayor parte de la deuda del sector agrario y ofrecía créditos a menor tasa que la banca privada. La SRA enfrentó estos intentos, denunciando que detrás de ellos se hallaba simplemente la necesidad de reducir el déficit fiscal (SRA, 1998a, pp. 6-8), lo que ciertamente podía haber sido esgrimido respecto de cualquier otra privatización.

A la modificación del IVA agropecuario ya referida se sumaría el envío al Congreso de un proyecto de reforma tributaria, que significaba un nuevo intento por avanzar en la expansión de la presión impositiva. En lo que refiere a la producción agraria, la SRA rechazó el aumento de la alícuota máxima del impuesto a las ganancias, la modificación de los impuestos internos, la reimplantación del impuesto a los activos bajo el nombre de *ganancias presuntas* y la creación de uno nuevo sobre el endeudamiento financiero (SRA, 1998g, pp. 183-5).

El proyecto de reforma tributaria quedaría trabado en el Congreso, pero la modificación del IVA agropecuario acabó siendo promulgada por decreto en mayo. La SRA avanzó entonces en la escalada interponiendo un recurso de amparo, y forzó así al gobierno a negociar. Una expresión de su presidente, Enrique Crotto, que se convirtió en la tapa de la *Anales* de mayo, sintetizaba en pocas palabras el humor de la entidad: “si querían hacerla mal, les salió fenómeno”. En la edición anterior, una nota titulada “IVA: ¿la vuelta al populismo?” llevaba el no menos expresivo epígrafe: “con un criterio más populista que económico, la reducción del IVA es una nueva retención a la producción agropecuaria” (SRA, 1998b, p. 32).

El decreto fue finalmente anulado y reemplazado posteriormente por uno que afectaba en menor medida a dicha producción, con lo cual la SRA se anotó un pequeño triunfo. Sin embargo, no había tenido fuerza suficiente para impedir un aumento en el precio del gasoil a finales de 1997, sucedido por otro en los peajes. Tampoco lograría evitar la creación de nuevos impuestos y la suba de otros ya existentes, principalmente de origen provincial y municipal, a lo largo de 1998. La *Memoria* de ese año dedica un apartado especial a esta cuestión y sintetiza en la sección de análisis económico: “el período bajo análisis se caracterizó por una casi constante confrontación entre las entidades agropecuarias y el gobierno en materia tributaria” (SRA, 1998g, p. 13).

En efecto, la confrontación había sido constante a lo largo de 1998: tanto la FAA como la CRA o sus federaciones multiplicarían los cortes de ruta a lo largo de todo el territorio nacional, a lo que se sumaría la realización de un paro en agosto, lanzado por CARBAP, y una marcha a Plaza de Mayo motorizada por la FAA en octubre (Pérez Trento, 2015). Así, tras un breve período de tensa calma, la confrontación volvía a plantearse para las entidades agrarias en términos de acciones directas, en abierto contraste con el accionar desarrollado por la SRA. Su dirigencia, mientras tanto, comenzaba a evidenciar que había quedado en una posición política sumamente compleja: sin dejar de defender, hasta aquí, la implementación de las reformas neoliberales, y buscando al mismo tiempo menguar la confrontación por parte de otros actores sociales, procuraría al mismo tiempo atenuar los aspectos que afectaban a los sujetos sociales que representaba. Esto se evidencia, por ejemplo, en declaraciones de Crotto respecto del aumento en el precio de los peajes

Creo que es una injusticia que en un país que tiene inflación cero haya aumentos de peaje. Más allá de que estén autorizados o no (...) también creo que a veces las reacciones son desmedidas (...). En un flete, el peaje es una porción del costo bastante chica y me parece que también sería responsabilidad de las empresas de transporte asumir ese costo (...). Nadie duda que las rutas deban ser manejadas por peaje. Han mejorado. Yo no sé lo que sería de este país si las rutas no tuvieran peaje (SRA, 1998b, p. 29).

A este escenario se sumaban los vaivenes en la ejecución de la política ganadera. Ya en marzo, la SRA había expresado su enojo por la ejecución unilateral de un plan de trazabilidad de la hacienda acorde con las exigencias de importación de la UE, respecto del cual denunció irregularidades en el proceso y precios excesivos (SRA, 1998b, p. 6). Al mismo tiempo, se producía en la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca (SAGPYA) un recambio de funcionarios que la SRA calificó como “traumático” (SRA, 1998e, pp. 32-4).

Ahora bien, si el gobierno menemista había logrado algún mérito en dicha área, éste consistía en la exitosa implementación de una serie de programas para la erradicación de la fiebre aftosa, que hacia 1997 resultó en la obtención del estatus de país libre con vacunación, lo que permitía avanzar en la reapertura del mercado europeo. Para la SRA, por lo tanto, esto no podía quedar abierto a manoseos de ningún tipo.

En medio de la campaña política, sin embargo, el nuevo director del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA), también en plena reestructuración, anunció sus planes de reclamar el estatus de país libre sin vacunación sin haber dado previa noticia a las entidades agrarias. El plan no llegó a ser concretado, y la SRA se horrorizaba ante la improvisación que exhibía el gobierno en tan sensible área:

Asistimos con cierta tolerancia a algo así como un renovado suplicio de Tupac Amaru, en el que distintos funcionarios forcejean por llevarse la mayor porción posible de mérito por el logro obtenido (...). Es necesario tener bien en claro que el fin de la vacunación obligatoria implica (...) la prohibición de vacunar en el país. Con eso no se puede jugar. Aceptamos el forcejeo por llevarse los méritos políticos, pero no vamos a permitir que en ese tironeo el Inca despedazado sea la salud de nuestras

vacas (...). En lugar de volcar el esfuerzo hacia el logro de medidas eficaces e seguridad en fronteras, se juega peligrosamente con la idea de hacer coincidir el año electoral con el éxito por decreto en una larga lucha (...). Así como el Estado controló que los productores cumpliéramos con la responsabilidad que nos tocaba en esta lucha, hoy exigimos al Estado que haga lo suyo y no se embarque en apresurados e irresponsables sueños triunfalistas (SRA, 1998c, pp. 4-5).

En este estado de cosas, CARBAP realizó un paro ganadero a principios de agosto, sin lograr desabastecer por completo el mercado de Liniers (*Clarín*, 02/08; *La Nación*, 03 y 04/08/98). Esto motivó un intercambio entre su presidente, que acusó a la SRA de boicotear el paro enviando carne al mercado, y la dirigencia de ésta, que respondió argumentando que aquélla convocaba al paro por cuestiones de política interna (SRA, 1998d, pp. 7-8).

La SRA no sólo no participaría de la medida, sino que tampoco dejaría de explicitar su apoyo al gobierno menemista y al programa económico neoliberal que había implementado, aunque recelaba de las medidas tomadas en el contexto de la crisis. Crotto enrostraría estos reclamos al propio Menem en la exposición ganadera de 1998. A la protesta por la cuestión impositiva sumó críticas al proyecto de reforma laboral, que calificó como “gatopardista” e incapaz de incentivar el empleo, y al poco interés por avanzar en la “racionalización del gasto público”. Asimismo, retomó la avanzada contra los capitales automotrices, que presionaban por un aumento en los aranceles de importación de automóviles: “una vez más un sector ineficiente de la industria argentina propicia el aumento del arancel externo común del MERCOSUR que sólo traerá aparejado un nuevo incremento de costos (...) e impedirá el abaratamiento de los fletes carreteros”. Por cierto, tampoco se privó de criticar a los países que sostenían los subsidios a la producción agraria, que dificultaban o impedían las exportaciones: “cabe preguntarles a esos jueces que quieren investigar sobre derechos humanos si nunca pensaron que también los productores de nuestros países tenemos el humano derecho de producir y comercializar sin trabas artificiales ni barreras proteccionistas” (SRA, 1999, p. 25)⁴.

La relación con el gobierno, mientras tanto, seguiría deteriorándose al calor de la crisis. En octubre, las cuatro entidades señalaron su “preocupación ante la restricción crediticia que se generó como consecuencia de la crisis internacional”, y reclamaron soluciones. Dos meses más tarde, los capitales exportadores agrupados en CIARA-CEC anunciaron la implementación de un diferimiento en el 15 % en el pago de la compra de las mercancías agrarias⁵. La SRA rechazó la medida en un comunicado titulado “Una vez más los problemas se transfieren a los productores”. En diciembre, volvió a protestar ante versiones de un nuevo impuesto a los combustibles, con insistencia en que el camino correcto debía ser la lucha contra la evasión y la “eficiencia” del gasto público. Dos semanas después, frente a la sanción de la Reforma Tributaria, rechazó especialmente el Impuesto sobre el Endeudamiento Financiero, que recaía sobre los intereses de los préstamos, mientras que en febrero de 1999 desempolvó un tema que parecía saldado: las retenciones a las exportaciones. Al respecto, expresó que “los productores de oleaginosas siguen soportando el efecto perverso de las retenciones a la exportación de sus granos, lo que constituye una rémora del pasado que es necesario subsanar”. Posteriormente, alertó sobre el “abusivo aumento de la tasa vial”, que se desarrollaba principalmente a nivel municipal (SRA, 1999a, pp. 10-3). A esto se sumaba la devaluación de la moneda brasileña, que expandió las importaciones de carne de pollo y de cerdo. Mientras tanto, los precios de los granos profundizaban su fase de contracción, que tocaría fondo en 1999.

La SRA comenzaba a impacientarse. En diciembre amonestaría al gobierno en duros términos, publicando un editorial titulado “¿Todo en orden?”, en el que protestaba por la presión impositiva, los casos de corrupción, la reestructuración del SENASA, el cambio de rumbo respecto de la lucha contra la aftosa, y la inacción ante la serie de inundaciones, entre otras cuestiones. Y en esta ocasión se abstuvo de condenar las acciones de protesta de las restantes entidades, esta vez vinculadas con la liberación de los fondos comprometidos para el enfrentamiento de las contingencias climáticas: “Apenas el 20 % de los 180 millones prometidos (...) llegaron a destino (...). Hubo que cortar rutas (...) provocar el caos que siempre condenamos, para que una orden del presidente desde Roma hiciera aparecer el dinero” (SRA, 1998f, pp. 6-7).

En su lectura de la crisis, sin embargo, y más allá de la larga serie de problemas locales que buscaba poner de relieve, el origen de la crisis debía buscarse en la situación internacional:

A nosotros también nos molesta y nos duele la frivolidad, el autoritarismo, el desenfado en la adjudicación política de fondos de ayuda, la designación de funcionarios como pago político y no en función de su idoneidad para el cargo, las promesas incumplidas, la justicia claudicante, el gasto público caótico y desproporcionado, la manipulación de bancas, los opositores que restan quórum, las alianzas simplemente electoralistas, los apetitos de poder por el poder mismo, la inseguridad permanente, la desocupación que posterga, lacera el alma y acorta la vida. La realidad nos golpea igual que a todos (...). Pero como dirigentes sectoriales debemos saber distinguir el descontento que se genera en las bases desde su condición de ciudadanos políticos (...) del reclamo surgido de una posición meramente gremial (...). El descontento en el sector existe, y desafortunadas medidas del gobierno tienen mucho que ver con él, pero su principal causa es la caída de precios internacionales de nuestros productos y las sucesivas crisis en las economías emergentes que han sacudido nuestros mercados (SRA, 1998a, pp. 6-7).

Así, la asociación buscaba hacer equilibrio en un escenario extremadamente complicado. Con el auge de la crisis, que efectivamente había vuelto a derrumbar los precios, el proceso de liquidación de los capitales agrarios se aceleraba; ante ello, las entidades agrarias redoblaron la confrontación. Al mismo tiempo buscaba contener la presión de sus propias bases ligando su descontento a su condición de “ciudadanos políticos”, esto es, a los aspectos anteriormente señalados de la coyuntura. De esta manera se sugería que los reclamos no podían tener un origen “gremial”, ya que la crisis en la rama agraria había sido causada, principalmente, por la evolución del mercado mundial. En este sentido, y si bien la SRA no mostraba intención alguna de sumarse a las acciones de protesta, se veía a sí misma desamparada ante un gobierno en retirada que parecía ocuparse más de la campaña política que de la situación en la rama agraria.

3.2. Del paro al repliegue

El nulo eco que encontraron sus reclamos, expresados con creciente virulencia, forzaron la situación hasta su límite. Tras el paro ganadero de 1998, la rama agraria se había vuelto un polvorín: entre enero y marzo, la FAA, CONINAGRO y la CRA o sus confederaciones multiplicaron las acciones de protesta (Pérez Trento, 2015)

A pesar de ello, el gobierno seguía sin recibir a las entidades, que reclamaban una reunión desde septiembre. Lo hizo recién siete meses después, durante la primera semana de marzo, en la cual Menem recibió por separado a sus dirigentes (*La Nación*, 6-11/03/99). En una de esas reuniones Crotto le entregó un informe detallando el efecto de las tasas de interés bancario y la elevación de los impuestos sobre la producción agraria, e insistió sobre la necesidad de eliminar impuestos. Se fue, sin embargo, con las manos vacías (*La Nación*, 13/03/99).

La situación había acabado, finalmente, también con la paciencia de la SRA: por primera vez en 10 años de gobierno menemista, resolvió interrumpir el diálogo. El 24 de marzo anunció la realización de un paro ganadero, al cual se plegó inmediatamente la CRA. Por su parte, la FAA y CONINAGRO acordaron participar y propusieron sumar una marcha (*La Nación*, 24-29/03/99).

El escenario había inquietado al gobierno, cuya primera reacción fue confrontar a las entidades agrarias. A pocos días del anuncio, el ministro de Economía, Roque Fernández afirmó que:

Los dirigentes del campo y la industria que participan de las protestas piden una devaluación (...). A medida que pasa el tiempo se empiezan a ver cuáles son los grupos corporativos que estuvieron al lado del Gobierno en las épocas de vacas gordas y cuando se acerca el final abandonan el barco. Ahí se ve cuáles son los verdaderos amigos de la apertura económica y las transformaciones (...). Que algunos industriales pidan devaluaciones no me sorprende pero hay otros sectores que ahora abandonan el barco (*Clarín*, 28/03/99).

Ante semejante acusación, la SRA volvió a dejar clara su posición de defensa de la Convertibilidad: “afirmamos categóricamente que nuestra entidad no abandonará jamás el barco, porque para nosotros el barco es el país” (SRA, 1999g, pp. 158-9).

Posteriormente, el gobierno desplazaría de la SAGPYA a Alonso, alegando que se había enfrentado con el resto del gabinete en defensa del agro, y convocó a negociar a la CRA y la SRA, en una tentativa por romper el frente agrario (Anales, abril 1999, p. 4). Pero esta última se negó a participar, y arrastró en su negativa a la primera. El último intento consistió en un anuncio de medidas, pero todo lo que ofrecieron como prenda de negociación fue la prórroga en el pago de renta para los campos inundados, y un proyecto de ley de apoyo crediticio (*La Nación*, 01 y 08/04/99).

Fue demasiado poco, y demasiado tarde. Las organizaciones rechazaron en bloque las medidas. El 19 de abril iniciaron un paro de una semana, que paralizó virtualmente el comercio de carne y granos. A esto se sumaron algunos piquetes aislados en el norte de Buenos Aires y en Entre Ríos, así como un tractorazo en Santiago del Estero, sostenidos principalmente por la FAA (*La Nación*, 19, 20 y 29/04/99)⁶.

La decisión de realizar el paro fue, en sus propias palabras, “una de las más trascendentes de los últimos años”. La falta de respuestas ante los problemas que planteaba al gobierno –e incluso siquiera de la voluntad para discutirlos–, sumada al agudizamiento de la confrontación de las entidades agrarias, forzó a la dirigencia de la SRA a pasar de las palabras a los hechos. Y, por cierto, sus socios respondieron: casi no se registraron operaciones durante esa semana en el Mercado de Liniers. En este sentido, la realización de un paro le permitía garantizarse, esta vez, la recepción del mensaje, puesto que “ganó espacios en la prensa de todo el país y, por primera vez, llevó el tema agropecuario al seno del Gabinete”, a quienes acusaban de hallarse en modo de “contestador automático” frente a sus reclamos (SRA, 1999a, p. 17).

En otras palabras, lo que para las restantes entidades se constituía simplemente como otra acción en el largo enfrentamiento que ya llevaban con el gobierno menemista, reforzada ahora por la participación de la SRA, para esta última tenía un fin menos trascendente: lograr que el gobierno le “atendiera el teléfono”, según su propia metáfora.

Era claro, en este sentido, que la asociación estaba lejos de haberse propuesto mediante el paro poner en cuestión los fundamentos de la política económica neoliberal. Aunque no dejaría de denunciar los aspectos que consideraba perniciosos, Crotto insistiría en que los problemas del sector provenían de la crisis internacional, mientras que la responsabilidad del gobierno se limitaba a aumentar la presión fiscal en lugar de instrumentar medidas para paliarla:

Este paro, desde mi punto de vista, no tiene otro motivo que el de demostrar la bronca, la impotencia y el sentimiento de abandono que siente el productor agropecuario cuando se le caen todos los precios internacionales, que sabemos que el gobierno no puede hacer absolutamente nada para remediarlo, pero sí puede tomar medidas para ayudar a pasar esta crisis (...). En lugar de hacer esto (...) nos pone más palos en la rueda, nos sube los impuestos (...) (SRA, 1999a, p. 17).

Estas declaraciones contrastaban con las de los presidentes de las entidades, en las que se cargaba de forma mucho más dura contra el gobierno y sus políticas. La SRA, sin embargo, no dejó de considerar al paro “un éxito”, sobre la base de que mediante el mismo habían logrado instalar en la opinión pública los problemas agrarios “en forma armónica y ordenada, [ya que] no afectó la convivencia ni los derechos de los demás”. En otros sentidos, sin embargo, tuvieron que reconocer que no había sido tan exitoso: “el gobierno (...) no escuchó el reclamo del campo. No se tomó medida alguna para aliviar el costo fiscal sobre el productor ni para disminuir el ‘costo argentino’” (SRA, 1999b, pp. 4-5).⁷

En este marco, la FAA propuso en mayo un nuevo paro. El gobierno respondió convocando a negociar a la SRA y la CRA, y anunciando la elevación del capital mínimo que tributaría el impuesto a la renta presunta (*La Nación*, 20/05/99). Esto se sumaba a otras medidas aprobadas durante el paro de abril, como la prórroga en el pago de dicho impuesto, una línea de crédito para deudores morosos, y el aumento de los impuestos a la importación de cerdos y lácteos. Fue suficiente para que la SRA se replegara desde ese momento hasta el

estallido final de la Convertibilidad –período en el que no tomaría parte en nuevas acciones de protesta–, pero no para que lo hicieran las restantes entidades, las cuales convocaron a un nuevo paro de cuatro días con movilizaciones y cortes en el mes de junio.

En este sentido, la unidad exhibida demostró ser absolutamente esporádica. La SRA volvió a tomar distancia de las entidades agrarias y del paro como método de protesta:

Yo creo que es muy importante la unidad, pero en base a algunas reglas de juego muy claras para todos (...). Cuando vamos a las grandes líneas filosóficas y uno está en una vereda y el otro en la de enfrente, con señores que han sido tenaces enemigos no de un gobierno sino de un sistema de vida, no hay unidad que valga (...). Si los maestros, las amas de casa, los camioneros, los automovilistas, los jubilados, los estudiantes, los desocupados, manifiestan sus legítimas angustias cortando rutas, impidiendo la circulación de productos y encendiendo mechas para el caos y el desorden, estamos poniendo en peligro, sin darnos cuenta, un estilo de convivencia democrática (...). Compartir la legitimidad de un reclamo no implica coincidir en la metodología de la protesta (SRA, 1999c, p. 25).

El paro se desarrolló con una multitud de cortes de ruta en la región pampeana, que se extendieron incluso hacia provincias del NEA y el NOA (*La Nación*, 11 y 25 al 29/05 y 02 al 10/06/99). La SRA se vio forzada entonces a reconocer que: “más allá de discutir adónde nos puede llevar un crescendo de medidas de acción directa en un país convulsionado que intenta una transición ordenada en democracia (...) la situación que da origen a estos reclamos es auténtica e insoslayable”.

Se ponía así de manifiesto que su negativa a participar en este tipo de acciones no respondía solamente a la dificultad que hallaban para confrontar directamente con un gobierno al que, más allá de las críticas coyunturales, seguían considerando como aliado. También creían que la adopción de medidas de fuerza más duras que los reclamos meramente verbales podía poner en riesgo la estabilidad del gobierno, sobre todo en un momento de crisis. Era necesario entonces calibrar adecuadamente los embates, no fuera cosa de acabar por contribuir, sin quererlo, al derrumbe del “modelo neoliberal”. En junio de 1999, Crotto dejaba traslucir estos miedos:

Yo no sé qué va a pasar si alguna de las entidades va al paro. Más allá de que yo le reconozco la razón a un productor que hace paro. Lo que creo y cree la SRA es que no es el momento. Insisto con esto porque me parece que la Argentina no está en estos últimos meses de gobierno como para hacerse los locos (...) los dirigentes tenemos que tener la suficiente prudencia como para no llevar baldes de nafta cerca del fueguito (...). El país está sufriendo una agresión externa por parte de algunos señores de fondos de inversión muy grandes, que ponen en duda ciertas medidas, como la Convertibilidad, que para los argentinos tienen que seguir en la Argentina. Los dirigentes tenemos que ser muy prudentes en las medidas que vamos a tomar y en las declaraciones que vamos a hacer (...). Hay que procurar que esto termine bien el 10 de diciembre y no quedar en el camino como sucedió en [el] 89. Lo que tiene que primar acá es la cordura (SRA, 1999c, p. 24).

Los llamados a la “cordura” cayeron en saco roto. Un nuevo paro comenzó a ser alumbrado en junio, tras un cambio en la instrumentación en el cobro del IVA que fue inmediatamente rechazada (*La Nación*, 10 y 14/06/99). El mes siguiente, FAA y CONINAGRO sumaron a la CRA a una marcha a plaza de mayo, en la que se concentraron unas 10.000 personas, provenientes en su mayoría de distintas áreas de la región pampeana. Dos días después, una protesta en Entre Ríos, en la cual participó la FAA, frustró un acto en el que iba a participar el presidente Menem (*La Nación*, 24 y 26/06, 16, 21 y 22/07, y 24/07/99).

A esta altura, las protestas de distintos sectores contra el gobierno de Menem se multiplicaban de manera exponencial, y el esquema económico en su conjunto amenazaba con resquebrajarse. La SRA comenzó entonces a exigir mano dura. Los destinatarios circunstanciales de los golpes reclamados serían los camioneros, cuyos cortes de ruta interrumpían la circulación de mercancías agrarias, e incluso la FAA, que se había sumado a los bloqueos: “no comprendemos la indiferencia de la policía ante estas conductas delictivas (...) ni (...) la posición de (...) entidades colegas que adhirieron a esa medida de fuerza” (SRA, 1999c, pp. 4-5).

A pesar de que ya a esta altura era evidente que no lograría obtener demasiado del gobierno saliente, la organización lo despidió solemnemente en la exposición ganadera de 1999. Allí, Crotto procuró mantener la línea que había adoptado la entidad respecto de la crisis, y volvió a hacer explícitos los esfuerzos de la Comisión

Directiva (CD) por contener los reclamos de su propia base social: “quiero que comprenda, Sr. Presidente, que estamos haciendo un gran esfuerzo para que el descontento de nuestros productores no se convierta en un trastorno nacional”. Pero a pesar del regaño, Crotto cerró su discurso dejando perfectamente clara la apreciación general que la SRA hacía del gobierno de Menem:

Sr. Presidente: ésta es la última vez que durante su gobierno usted ocupa oficialmente esta tribuna (...). Sepa que esta es su casa. Las puertas de nuestra entidad estarán siempre abiertas para recibirlo. Si tuviera que hacer un balance de su gestión el discurso se haría largo. Puede concluir orgulloso su mandato. Usted rompió las barreras que impedían el crecimiento de nuestro país. Los argentinos de bien se lo agradecen. Los errores que se cometieron servirán de escarmiento y ojalá quien lo suceda sepa aprovechar la experiencia atesorada. Por eso, cuánta razón tenía Cervantes cuando decía que entre los pecados mayores que los hombres cometen, unos dicen que es la soberbia, [pero] nosotros decimos que es la ingratitud. Gracias por todo lo que hizo, y permítame remedarlo con mi deseo de “que Dios lo bendiga” (SRA, 1999d, pp. 24-5).

Mientras Menem pronunciaba su último discurso en Palermo, la FAA lo despediría con un nuevo paro de dos días, motivado por el rechazo del Banco Nación a ofrecer las líneas de créditos y refinanciamientos de deuda ya pactadas con el gobierno (*La Nación*, 27/07 y 21/08/99). Pocos días después, de la Rúa resultaría vencedor en las elecciones. Así, los temores de la SRA parecían disiparse en lo inmediato: la transición presidencial no sufriría los sobresaltos de una década atrás. Pero lejos de resolverse, la crisis seguía desarrollándose.

3.3. El cuestionamiento de las reformas y la desbandada del G-8

Paralelamente, la SRA había recrudecido los enfrentamientos contra distintas fracciones de capitalistas. Una de ellas, como vimos, eran los transportistas, que interrumpían permanentemente la circulación de mercancías agrarias e insumos para la producción. Los industriales lecheros también se convertirían en blanco de sus reclamos. Tras el incremento en la producción de leche destinada a su procesamiento industrial, pactado con las cámaras del sector, éstas habían reducido el precio pagado a los tamberos. Asimismo, la puesta en marcha del llamado Plan Canje, destinado a sostener las alicaídas ventas de las automotrices, volvería a desatar críticas.

La crisis del neoliberalismo era ya además lo suficientemente honda como para que la SRA comenzara a cuestionar sus propios principios liberales⁸, y sugiriera tibiamente la posibilidad de que la producción agraria fuera subsidiada. En efecto, tras afirmar que algunos el rechazo a los subsidios constituía en realidad un “dogma”, planteó que “sí necesitamos protecciones y subsidios para sobrevivir en los mercados internacionales que están plagados de ellos, y sí el Estado tiene dinero. Bien que lo malgasta a nuestra vista, a la vez que subsidia otras actividades. ¿Alguno pensó cuánto cuesta el Plan Canje?” (SRA, 1999e, pp. 4-5).

Pero, además, la forma concreta que había tomado la implementación del programa económico neoliberal también comenzaría a revelarse contraproducente. Sin ir más lejos, la política de privatización del capital ferroviario que la SRA había apoyado fervorosamente estaba lejos de haber dado los resultados esperados, ante lo cual ensayó un tibio replanteo: tras atribuir dicha privatización a “el caos económico reinante” y “las culpas que se achacaban al servicio ferroviario de aumentar (...) las deudas del Estado”, lamentó el mal estado del servicio a pesar del sostenimiento de subsidios, la desconexión en la que el cierre de estaciones sumió a pueblos enteros, y la pérdida de empleo producida por el cierre de talleres y la contracción de la gestión del servicio. En conclusión, afirmó que “son muchos los que se preguntan si no fue un error despreocuparse totalmente del paquete ferroviario” (SRA, 1999f, pp. 38-9).

A esta altura, cuando comenzaba a ser evidente que la Convertibilidad agonizaba, y con ella todo el esquema macroeconómico, las distintas fracciones del capital se reacomodaban. El G-8 se había disgregado hacia finales de 1998, y sus integrantes habían partido sus caminos. Por una parte, tras la designación de su nuevo presidente en 1999, la UIA tomaría un nuevo rumbo: comenzaría a articular reclamos de políticas específicas para el sector industrial, y cuestionaría además el alto costo financiero, el papel del MERCOSUR,

la no aplicación de las leyes antidumping, la apertura económica y la no restricción de las importaciones. El Grupo Productivo (GP), tal el nombre que adoptó la nueva organización, integraría también la Cámara de la Construcción y la CRA, que fue invitada a participar tras el rechazo de la SRA (Dossi, 2014; Salvia, 2015). Esta última, por otra parte, presionaría por una resolución de la crisis basada en la profundización del ajuste, posición similar a la que sostendrían los representantes del capital bancario y de las empresas privatizadas.

Así, la crisis de la Convertibilidad polarizaría las posiciones: de un lado quedaría el GP que, timoneado por la UIA, presionaría por una resolución de la crisis que favoreciera a los capitales del sector industrial. En particular, la fracción industrial que había ganado el control de la UIA poseía un perfil neodesarrollista, con lo cual los capitales financieros quedarían determinados como sus principales enemigos. A ellos se sumaban las cadenas de supermercados y las empresas privatizadas, que aparecían como principales beneficiarios de la política económica. Del otro lado quedaban entonces estas fracciones del capital, que impulsaban un mayor ajuste y endeudamiento, posición que compartía la SRA (Salvia, 2014b; Merino, 2016). En lugar de avanzar hacia la formación de un frente común, no obstante, la SRA enfrentaría duramente a las empresas privatizadas. Lo mismo venía haciendo desde principios de la década respecto de los capitales bancarios, a quienes acusaba (al igual que el GP) de cobrar tasas de interés excesivamente altas.

En diciembre, la asunción de De la Rúa sumergiría a las entidades en un compás de espera, en la expectativa de anuncios de algún tipo para el sector agrario. La SRA no se había corrido un solo milímetro de su línea: “el principal factor que ha provocado la crisis de nuestro sector es la brutal caída de los precios internacionales”, caída que estaba influida, aseguraban, por “los crecientes subsidios a la producción y a la exportación que aplican las economías desarrolladas y las modificaciones en la política cambiaria de países competidores y compradores de nuestros productos”. Asimismo, volvería a dejar claro que “sostener la estabilidad a través de la actual política monetaria es vital para nuestra economía, por lo que nos está vedada la solución facilista de la devaluación para paliar los problemas del sector exportador”. Por ello, sólo podía buscar que se redujeran los costos internos. Y al respecto, instó al nuevo gobierno a actuar de manera urgente, recordándole la vigencia de los “impuestos distorsivos”, el aumento de la presión impositiva, y al alto precio de los fletes, explicado por los aumentos del gasoil y los peajes, así como la “protección” que reciben los camiones fabricados localmente, todo lo cual impedía abaratar el servicio (SRA, 2000a, pp. 4-5).

En este contexto crítico, la lucha por la apropiación de la renta de la tierra recrudesció. A la disputa mantenida con los capitales automotrices se sumaban ahora los petroleros, que se consolidaban como otro enemigo de la clase terrateniente:

Dos años de negociación (...) llevó el acuerdo al que se arribara para el comercio automotor (...). Ninguno de nosotros, hombres comunes, comprende muy bien su contenido, pero todos sospechamos que no va a beneficiar a los usuarios y menos al productor, que continuará usando los servicios de camiones fabricados por una industria que goza de una protección efectiva de un 47 % sin contar el plan canje (...). No se bajará el costo argentino mientras no se logre un efectivo control de las empresas privatizadas (...) que someten al usuario a una condición de servidumbre que lo obliga a pagar tarifas desproporcionadas a veces con la complicidad del Estado que, como en el impuesto a la transferencia de combustibles, se asocia a esa exacción a través de un alto porcentaje del precio de venta. Ejemplo paradigmático el de las compañías petroleras, que parecen intocables para el Estado nacional, quizás por el impuesto que percibe (SRA, 2000b, pp. 4-5).

El enfrentamiento con los capitales del sector industrial subiría el voltaje. Las protestas por las “transferencias de ingreso” hacia las automotrices formuladas en las editoriales de febrero y marzo ya citados se repetirían en mayo, junio y julio, con no menor virulencia. En junio, la SAGPYA difundió además un informe en el que afirmaba que, por medio de distintos mecanismos de la política comercial que habían sobrevivido a la euforia desreguladora de principios de la década, seguían produciéndose transferencias de ingreso no sólo hacia los capitales automotrices, sino también a las ramas de autopartes, textiles, de refinación de petróleo, plásticos y siderurgia (*Clarín*, 01/07/00). La SRA no pudo menos que lamentar que el propio Estado acababa de reconocer que “en 1999, en plena crisis, hemos transferido más de cinco mil millones de

dólares (...) a sectores que producen bienes o servicios caros que estamos obligados a comprar, mientras se nos niega ayuda por tener costo fiscal” (SRA, 2000c, pp. 4-5).

En la inauguración de la exposición de Palermo, Crotto volvería a atacar duramente a los capitales del sector industrial, denunciando “la errónea política fiscal que históricamente nutrió al sesgo antiexportador”, y los subsidios para “seudo empresas y (...) personeros del lobby de la ineficiencia, que además utilizan parte de esos fondos para perpetuar sus ventajas” (*Anales*, agosto 2000, p. 24). Similares apreciaciones vertió en una entrevista:

...tenemos que trabajar todos juntos en el agro para que se acaben las transferencias de recursos a otros sectores y si la industria que no recibe más esos fondos desaparece, que lo haga, como sucede con los productores a los que no les dan los números (*La Nación*, 31/07/00).

Al mismo tiempo, la entidad avanzó en la ofensiva contra las empresas privatizadas, instando a evitar la conformación de “monopolios y oligopolios que perjudican a personas y empresas” que se habrían consolidado en los sectores de empresas privatizadas y los supermercados (SRA, 2000e, pp. 22-4).

La SRA se veía así forzada a reconocer que tanto las privatizaciones como los efectos de la política de apertura comercial que había promovido no habían dado los resultados esperados. Similar apreciación vertió su vicepresidente, Hugo Biolcati, en un debate organizado por *La Nación*: “con las privatizaciones se nos dijo que lo importante no era la plata que se obtendría, sino la baja de tarifas debido a una mejor eficiencia. Pero desde que se privatizó, en lugar de tener servicios más baratos, los tenemos más caros” (SRA, 2000d, p. 22).

A diferencia del planteo respecto de los ferrocarriles, sin embargo, en el que parecía considerar la posibilidad de una reversión de las privatizaciones, la SRA siguió buscando impulsar el proceso de reformas neoliberales, argumentando la necesidad de implementar una “segunda etapa” de ingreso de capitales para aumentar la competencia y disminuir los costos. Este planteo se sostenía sobre la idea de que en ramas en que se habían asentado las empresas privatizadas se habían conformado mono y oligopolios, que elevaban artificialmente el precio al que venden sus mercancías (SRA, 2001c, pp. 14-5).

Así, el enfrentamiento contra los capitales de las empresas privatizadas impedía a la SRA actuar coordinadamente con una de las fracciones del capital que pugnaban por una salida de la crisis similar. Igualmente tensa era la relación con sus pares de la rama agraria, que no vacilaban en enfrentar abiertamente a los gobiernos neoliberales. Incapaz de estructurar una alianza, la SRA seguiría su camino en soledad.

3.4. La SRA en el derrumbe del neoliberalismo

A principios del año 2000, las entidades agrarias retomarían la protesta: en marzo, la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP), integrante de la CRA, arrastró a ésta a un primer paro (*La Nación*, 18-22/05/00). En octubre, la delegación de Entre Ríos de la FAA se sumaría a un paro de transportistas, justo cuando la CRA gestionaba un nuevo paro conjunto. A pesar de que el tono de las críticas de la SRA al gobierno había ido *in crescendo*, siguió sin correrse de su línea y buscó detener la acción “para darle oxígeno al gobierno y superar este difícil momento político”. Pero la medida siguió en pie, y las tres entidades realizaron un paro comercial de 6 días, al que se sumaron organizaciones de camioneros (*La Nación*, 11 y 16-22/10/00).

La SRA seguía temiendo que las acciones de protesta acabaran derrumbando al régimen de la Convertibilidad:

Un peligroso cocktail compuesto por una insostenible situación económica de un sector marginado cada vez mayor, sumado a la prédica desestabilizante de la izquierda y a los comercialmente rentables títulos catástrofe de los diarios, hacen del estallido social una posibilidad cada vez menos remota (...). Las propuestas deben ser serias y los reclamos hechos con prudencia (...). Como productor agropecuario no me he sentido entre pares, sino más bien atemorizado, cuando piquetes de jovencitos de no más de dieciocho años me detenían días pasados en las rutas de mi país, alegando representarme (SRA, 2000f, pp. 4-5).

Mientras tanto, el escenario político seguía acelerando su deterioro, al compás de la crisis económica. En noviembre, el vicepresidente renunciaba tras el escándalo de las coimas en el Senado. El mes siguiente, un nuevo brote de aftosa reaparecía en el Noreste, tensando la relación de las entidades con el gobierno de De la Rúa: a la torpeza política que exhibió en el manejo de rebrote se sumaba la incapacidad de acción del SENASA, al que se le inyectaban cada vez menos fondos. Así, la Unión Europea volvió a impedir las importaciones de carne argentina, pero no por la reaparición de la enfermedad (ya que el brote se desató antes de que pudiera reconocer el estatus concedido por la OIE de país libre de aftosa sin vacunación), sino por la política de ocultamiento (*La Nación*, 16/01/02).

A pesar de que el sostenimiento de la Convertibilidad dependía cada vez más abiertamente de la renovación de una deuda impagable, la SRA celebró su nueva expansión mediante el llamado “blindaje”, que lograría extender otro año la agonía: “esta semana clave, en la que internacionalmente se nos renovó la confianza y se nos dio el oxígeno para seguir respirando, no debe ser desperdiciada porque no sabemos cuándo tendremos otra oportunidad” (SRA, 2000g, pp. 4-5). Pero la crisis seguía avanzando. En mayo de 2000, el gobierno de la Alianza anunciaba un plan de ajuste que incluía un recorte en los sueldos estatales superiores a 1000\$, la reestructuración del sistema previsional y la desregulación de las obras sociales. El plan había sido consensuado con el Fondo Monetario Internacional (FMI), que condicionaba la renovación de los empréstitos a la expansión del ajuste (*La Nación*, 29 y 30/05/00). Pero si los acreedores externos atenazaban al gobierno de un lado, del otro la acción política de la clase obrera lo enfrentaría con fuerza creciente en las calles. La visita del FMI fue repudiada por la fracción disidente de la Confederación General del Trabajo (CGT) conducida por Moyano, que organizó una numerosa marcha. El mes siguiente, junto a la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) y a otra fracción de la CGT realizarían el primer paro nacional bajo el gobierno de De la Rúa (*La Nación* y CL, 10/06/00).

A principios del año siguiente, la crisis fagocitaría al primer gabinete económico nombrado por de la Rúa. Tras la renuncia de Machinea, el gobierno de la Alianza, o lo que a esta altura quedaba de ella, consideró para el cargo a Ricardo López Murphy y a Domingo Cavallo, y se inclinó por el primero. Crotto lo recibió con agrado, y afirmó: “sabe que hay que bajar el costo fiscal, intentar que todos paguen (...). Yo, como presidente de la nación, lo hubiese elegido a él por su afinidad con el partido, era lógico. Aunque creo que Cavallo también hubiese sido una excelente elección” (*La Nación*, 07/03/01).

El nuevo ministro no demoró mucho en anunciar un programa de brutal reducción del gasto público, que alcanzaba los 2.000 millones de pesos para el año en curso y 2.500 para el siguiente, y recaía particularmente sobre el presupuesto destinado a la educación pública. Y a pesar del apoyo de una amplia fracción de la clase capitalista (*La Nación*, 18/03/01), tampoco demoró demasiado en verse obligado a renunciar, tras una serie de cortes de ruta y paros docentes que culminaron en una nueva huelga general convocada por la CTA, la CGT de Moyano y la Corriente Clasista y Combativa (CCC).

El gobierno de la Alianza jugó entonces su última carta en el intento de sostener la Convertibilidad y el rumbo general de la política económica, reponiendo a Cavallo en el Ministerio de Economía. Crotto volvió a mostrar su apoyo, expresando estar “muy satisfecho” por el regreso de “el economista más espectacular del último medio siglo que tuvo el país” (*La Nación*, 21/03/01).

Dos meses después, Cavallo expuso su propio paquete de medidas que sería, cuanto menos, confuso, puesto que eliminaba o modificaba impuestos ya existentes, a la par que creaba otros nuevos. En lo que refiere a la producción agraria, se incluía la eliminación de impuestos considerados “distorsivos” por la SRA, como el de endeudamiento empresario (intereses) y ganancia mínima presunta, la disminución del costo de los peajes y del impuesto a las ganancias y a los vehículos gasoleros. También se devolverían los saldos retenidos del IVA, pero mediante un bono que, se descontaba, circularía a un valor menor al nominal. Al mismo tiempo, sin embargo, se proyectaba aumentar el precio del gasoil, se creaba un impuesto a las transacciones financieras, y se reducía la alícuota del IVA a la venta de granos. No menos confusión generó el anuncio de la “ampliación” de la Convertibilidad, por la cual el tipo de cambio para el comercio exterior se determinaría como un promedio

entre el dólar y el euro, lo que en la práctica representaría una pequeña devaluación del tipo de cambio para las exportaciones⁹.

La evaluación de la SRA fue ambigua, como se refleja en las dos notas de análisis económico aparecidas en *Anales*. En la primera se establecía que las medidas lograrían una reactivación en la economía, y que la rama agraria había sido beneficiada por la eliminación de impuestos distorsivos y la modificación impositiva en general. Respecto del nuevo tipo de cambio comercial, se señalaba que “el balance es positivo para las materias primas”. En suma, la SRA apoyaba el plan por la inclusión de “medidas tendientes a lograr una reactivación de la economía (...)”. Las medidas económicas son buenas para el agro, pero financieramente supondrán un esfuerzo adicional” (SRA, 2001a, pp. 28-9). Sin embargo, en la nota siguiente, protestaban en duros términos contra la nueva modificación del IVA: “pretender reducir las alícuotas de IVA a la venta de granos es una aberración” (SRA, 2001a, pp. 30-1).

Hacia mediados del 2001 los acontecimientos comenzaron a precipitarse. Al impuesto al cheque puesto en vigor en mayo le siguió un nuevo recorte presupuestario. En julio se sancionó la ley de “déficit cero”, que procuraba suprimir el déficit fiscal mediante una quita en los salarios públicos del 13 %, así como una reducción en los subsidios de desempleo y los presupuestos provinciales, entre otras medidas de similar tenor. Al mismo tiempo, el gobierno buscó contener la presión de la deuda mediante una reestructuración que pasó a la historia como “megacanje”, en la que se postergaban vencimientos de capital e intereses hasta el 2005 y se incrementaba la deuda total.

La SRA apoyó, una vez más, el avance del ajuste. Tras el anuncio de la ley de déficit cero, emitió un comunicado de prensa titulado “Para volver a creer”, en el que afirmaban que:

El país ha enfrentado el duro golpe de enfrentar una realidad que veníamos escondiendo debajo de la alfombra. No tenemos resto, nuestra capacidad de endeudamiento tocó fondo y la única salida es tratar de sobrevivir en lo inmediato con nuestros recursos (...). Los caminos son claros y no existen medidas alternativas. El gasto público no puede sostenerse a nivel nacional y mucho menos a nivel provincial. La angustia y el dolor que generan los recortes salariales, especialmente en los sectores de menores recursos, deberán ser acompañados y contenidos con gestos de grandeza de parte de nuestros gobernantes (...). La SRA, como una de las entidades más antiguas del país, llama a una mesurada reflexión de todos los sectores involucrados (...) para acompañar (...) un proceso de restricción inevitable que nos permita volver a empezar (SRA, 2002b, pp. 49-50).

Por su parte, entre julio y agosto, tanto la CGT liderada por Moyano como la CTA y la CCC lanzaron dos nuevas huelgas generales, mientras que los desocupados, agrupados en las distintas vertientes del movimiento piquetero, confluyeron en un congreso en el que determinaron la realización de numerosos cortes de ruta. La conducción oficial de la FAA y la fracción representada por Chacareros Federados participarían de estas acciones (Pérez Trento, 2015). Mientras tanto, en la exposición ganadera Crotto volvió a defender las medidas de Cavallo por devolver competitividad “a un sector que estaba al borde del colapso”. La proximidad de las elecciones legislativas motivó, asimismo, una encendida diatriba, en la que la defensa del “modelo” aparecía inexorablemente atada a la defensa del débil gobierno que lo sostenía: “debemos estrechar filas en torno al gobierno porque no es la suerte de un partido la que está en juego, sino la existencia de la Nación misma (...). Este es el momento de dar la Madre de todas las batallas: la lucha contra el gasto público y la reducción a cero del déficit fiscal”. Y ante el nuevo momento de flujo de la lucha de clases, volvió a pedir el descargo de la represión sobre los trabajadores desocupados que seguían enfrentando al gobierno: “no podemos aceptar en silencio que grupos de piqueteros (...) corten impunemente las rutas argentinas y nadie haga nada para impedirlo” (SRA, 2001b, pp.14-7). Así, aun ante el inminente colapso, la SRA no atinó más que a defender la política de ajuste, reclamar represión para los que la enfrentaban, y apoyar al gobierno que daba una forma política cada vez más precaria a la contracción económica.

En noviembre, el agravamiento de las inundaciones volvía a partir aguas entre las organizaciones agrarias: mientras que la SRA se limitó a protestar verbalmente, la FAA, CONINAGRO y CARBAP, menos contemplativas, se movilizaron a Plaza de Mayo, y sumaron su granito de arena al estado general de efervescencia (*La Nación*, 06/11/01).

La Convertibilidad sufría ya sus últimos estertores. Tras la concreción de la primera fase del canje de la deuda, Cavallo gestionó ante el FMI el desembolso de créditos pendientes a cambio de realizar un nuevo ajuste presupuestario para el 2002. La evidente incapacidad del gobierno para efectuarlo, sin embargo, hizo fracasar las negociaciones, ante lo cual el ministro decidió postergar el pago de las jubilaciones y anunció un aumento de los recortes salariales y la supresión del pago de los aguinaldos. El derrumbe ya se presentaba como algo inminente, y la fuga de dólares y el retiro de depósitos bancarios que siguió a los anuncios no hicieron más que retroalimentar la espiral.

En este contexto, algunas de las organizaciones representantes de la clase capitalista que defendían abiertamente el rumbo general de la política económica aún vigente publicaron una solicitada llamando a la realización de un “pacto nacional”. Allí se reafirmaba la necesidad de sostener la Convertibilidad, se defendía la Ley de Déficit Cero, la reestructuración de la deuda pública, y se llamaba, en última instancia, a “defender las instituciones de nuestra Patria y la continuidad, sin interrupción, ni cambios, de nuestro régimen constitucional”. La SRA adhirió a los firmantes, que incluían a la Asociación de Bancos de la Argentina, la Cámara Argentina de Comercio, y la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios, mas no a la UIA ni las restantes entidades nucleadas en el GP (*Clarín*, 18/11/01). La perspectiva de una alteración del orden institucional, o acaso la consecuencia que ello tendría respecto del esquema económico, preocupaba a la dirigencia de dichas asociaciones. En particular, Crotto destacó que “no se puede andar especulando con cambios de figuras. Sería un error que pagaríamos todos los argentinos (...). La situación del país es lo suficientemente grave para buscar un consenso. No podemos estar bailando sobre el Titanic” (*La Nación*, 19/11/01).

El 1 de diciembre, Cavallo decretó el congelamiento de los depósitos bancarios para detener la sangría, lo que dio lugar a un nuevo ciclo de movilizaciones. La imposición del “corralito” bancario fue el último intento de sostener la a esta altura insostenible sobrevaluación del peso. A mediados de diciembre todo el arco sindical dispuso un paro nacional, al que adhirieron la FAA y CONINAGRO. Los sucesos del 19 y 20 de diciembre precipitaron la caída del gobierno de De La Rúa y el fin de la Convertibilidad.

La SRA, por su parte, había sido incapaz de alterar el sentido de su acción política, incluso en el ocaso del neoliberalismo. Valga como prueba el discurso de fin de año pronunciado por Crotto el 19 de diciembre, mientras la Plaza de Mayo recibía ya a los manifestantes:

Nuestro gran cometido es mostrarle al mundo que somos capaces de construir sobre bases sostenibles un país digno de crédito (...). La falta de solvencia fiscal y la pérdida de competitividad son factores que nos empujarán al default, y que traerán como consecuencia inmediata la desaparición del financiamiento externo e interno, fenómeno que en la práctica ya se manifiesta (...). No podemos pensar en devaluaciones que nos retornarían a la hiperinflación, ni en dolarizaciones que la inmensa mayoría no quiere (...). El camino es bajar el gasto público y lograr el equilibrio fiscal (SRA, 2002b, pp. 48-9).

Así, incluso a horas del colapso, la SRA fue incapaz de considerar algún tipo de salida de la Convertibilidad, y siguió apoyando un curso que ya había demostrado haberse vuelto inviable. La entidad había mantenido su promesa de no abandonar el frágil barco de la Convertibilidad. Pero cuando éste finalmente se hundió, la arrastró consigo.

4. CONCLUSIONES

A lo largo de este trabajo hemos procurado mostrar cómo el accionar político de la SRA –a la que aquí analizamos en cuanto representante de una fracción de la clase terrateniente– se vio tensionado de distintas maneras a lo largo de la crisis de la Convertibilidad. Repasémoslas brevemente.

En primer lugar, el estrecho vínculo que había logrado entablar con el gobierno menemista exhibió momentos de marcada tirantez. Para la SRA, sin embargo, se hallaba en juego mucho más que eso: la propia reproducción del esquema económico de la Convertibilidad había comenzado a peligrar. La entidad se

debatía entonces entre enfrentar algunas de las medidas tomadas por el gobierno que, desde su óptica, no hacían sino profundizar la crisis en la rama agraria, y buscar obtener algún tipo de compensación por la vía de la negociación, como había hecho (aunque con poco éxito) a lo largo de la década. Sólo cuando esta última vía se halló obstruida, lo que se sumaba a la alarma manifestada por el cariz que tomaba la política ganadera, la SRA decidió, por primera y única vez en todo el período neoliberal, acompañar a las restantes entidades en la realización de un paro. Así, la estrategia de desligarse de todo tipo de acción de protesta contra el gobierno y privilegiar la vía de la negociación entró en un momento de tensión.

El paro, sin embargo, había tenido escaso efecto, como reconocería la propia asociación. A pesar de ello, no sólo se abstuvo de participar en el siguiente, sino que, en la última exposición ganadera inaugurada por Menem, Crotto eligió cerrar su discurso deshaciéndose en elogios respecto de las bondades del programa neoliberal implementado una década atrás.

Quedaba así claro que, a pesar de que rechazaba la gestión de la crisis que hacía el gobierno, la SRA buscaría a toda costa preservar el esquema económico. Y cuanto más amenazaba éste con resquebrajarse, más se cuidaba aquélla de lanzarse a realizar acciones que pudieran contribuir a acelerar su caída. En efecto, cuando bajo el gobierno de De la Rúa se profundizó aún más la crisis, la entidad buscó preservar la estabilidad institucional, evitando participar en acciones con que las restantes organizaciones agrarias enfrentaban al gobierno y reclamando represión ante el auge de las protestas.

Su acción política, en este sentido, se orientó a direccionar la gestión de la crisis hacia la profundización del ajuste y la expansión del endeudamiento. Esto la alejaba de la estrategia desarrollada por la UIA y las otras organizaciones nucleadas en el GP, mientras que coincidía, en lo sustancial, con los reclamos formulados por los representantes de los capitales bancarios y las empresas privatizadas.

Sin embargo, no lograría articular su acción con éstos. La SRA no se limitaría a retomar la escalada contra los capitales del sector industrial –desempolvaría las acusaciones de que éstos eran “ineficientes” y sólo capaces de reproducirse sobre la base de subsidios gestionados por lobbistas, argumentos de los que se había valido en los años de la instauración y consolidación del neoliberalismo–, sino que atacaría también a los capitales de las empresas privatizadas, a las que acusaba de haber conformado mono u oligopolios y elevar artificialmente el precio de los servicios prestados. Y también enfrentaría, a lo largo de todo el período, a los capitalistas del sector bancario, en relación al nivel de las tasas de interés. De esta manera, la tensión existente entre la SRA y estos actores sociales, así como respecto de las otras asociaciones agrarias, impediría a la primera articular su acción política en un bloque de mayor peso.

De esta forma, como destaca Gálvez (2012), la SRA se enfrentaría tanto al bloque que pugnaba por una resolución de la crisis que beneficiara principalmente a los capitales del sector industrial como a los actores sociales que coincidían con ella en buscar una salida que pasara por la expansión del ajuste y el endeudamiento externo. Sin embargo, creemos que el hecho de que la entidad accionara en el sentido del sostenimiento de la Convertibilidad no es resultado de esta incapacidad de entablar alianzas. Y si este accionar aparece como ambivalente, ello obedece al contexto de la crisis, en el que el temor a contribuir al colapso del esquema económico limitó fuertemente el tenor de sus reclamos y protestas. Así, no dejó de denunciar los perjuicios causados por la gestión que hicieron de la crisis los gobiernos de Menem y de la Rúa, pero tampoco abandonó la estrategia de la negociación. En este sentido, el paro de abril de 1999 se constituyó como una situación absolutamente excepcional, relacionada a las particularidades ya señaladas de la coyuntura. El hecho de que la SRA no había variado su estrategia pudo verse cuando apenas dos meses más tarde se alejó de sus pares sectoriales, que profundizaron su estrategia de confrontación llamando a realizar otro paro, y en su lugar abogó por mantener la “prudencia” y la “cordura”.

Por otra parte, también el liberalismo económico que caracterizó históricamente a la entidad fue cediendo terreno a lo largo del período neoliberal, como señala Heredia (2003). En este sentido, el cuestionamiento de las reformas económicas, y particularmente de las privatizaciones, no la llevó sino a profundizar en su línea: el problema, argumentaban, era que dicho proceso no había sido desarrollado suficientemente¹⁰. Pero

el agudizamiento de la crisis la llevó a reconsiderar también, circunstancialmente, su posición respecto de los subsidios. En efecto, tras haber batallado desde principios de la década para avanzar en la eliminación de algunos de los mecanismos más directos de apropiación de renta de la tierra por parte de los capitales del sector industrial, tales como los subsidios a la producción o el cierre total o parcial del mercado interno mediante aranceles a la importación (Pérez Trento, 2017a), y luego de afirmar que la producción agraria, a diferencia de aquéllos, no necesitaba recibirlos para subsistir, puso en duda momentáneamente esta posición. De este modo, su versión extrema del (neo)liberalismo económico también comenzaba a tensionarse.

En síntesis, la SRA accionó decididamente para preservar el esquema económico neoliberal y, particularmente, la Convertibilidad, incluso cuando ésta había entrado en sus horas finales. Lo hizo, como vimos, amparada en el diagnóstico de que la crisis local se constituía como reflejo de la mundial, sobredeterminada a su vez por las políticas proteccionistas que habían provocado el derrumbe de precios. Así, se mantuvo aferrada al esquema de la Convertibilidad que, vía la marcada sobrevaluación de la moneda, afectaba particularmente a la clase terrateniente. En este sentido, se ha estimado que el sostenimiento de este tipo de cambio provocó que dicha clase dejara escapar, en promedio, un 80 % del total de renta de la tierra (Iñigo Carrera, 1998; 2007).

Dicho accionar dista de ser novedoso, ya que la SRA defendió la Convertibilidad desde su implementación en 1991. Esto choca, ciertamente, contra sus propios intereses, al menos en la medida en que se constituye como representante de una fracción de los terratenientes. En efecto, a apenas un año de la salida de la Convertibilidad, desde la propia SRA reconocerían que tras la devaluación “el campo ha salido favorecido, entre comillas, [ya que] el sector exportador en los últimos años había perdido mucha competitividad y el agro lo estaba sintiendo” (SRA, 2002a, pp. 12-3). La apreciación reaparecería años más tarde: “el uno a uno terminó complicando al campo” (SRA, 2008, p. 56). Cabe entonces plantear algunas consideraciones respecto de este accionar.

En primer lugar, la SRA notó tempranamente que el tipo de cambio afectaría a los sectores exportadores. La Convertibilidad, sin embargo, no se limitaba a fijar una paridad cambiaria, sino que además establecía límites a la emisión de moneda, lo que la SRA consideraba como uno de los principales problemas que debían resolver las reformas neoliberales. Por otra parte, la asociación estimaba que el avance de dichas reformas más que compensaría la desventaja cambiaria, al hacer caer los costos de producción (SRA, 1991, pp. 78-9). De aquí que, al abrazarse a la Convertibilidad, la necesidad de reducir los costos de producción se le presentara de forma aún más acuciante. Como vimos, sin embargo, el resultado de las reformas fue precisamente el inverso. Pero la posibilidad de salir de la Convertibilidad tampoco emergió una vez comprobado este fracaso, sino que, por el contrario, la SRA no atinó más que a luchar por la profundización del proceso, y reclamó el ingreso de más capitales.

En este sentido, es pertinente destacar que, al consolidarse, la Convertibilidad quedó asociada con la estabilidad económica y política, lo que dificultaba plantear una posible salida (Beltrán, 2011). Así, ante la incapacidad para vislumbrar la construcción de un régimen alternativo, y guiada por la convicción de que los problemas existentes provenían en buena medida de la deficiente e insuficiente implementación de reformas, a la SRA no le quedó más que accionar en pos de profundizar las políticas neoliberales en el marco de la Convertibilidad, cosa que hizo hasta el mismísimo día de su estallido.

REFERENCIAS

- Azcuy Ameghino, E. (2004). Reformas económicas y conflicto social agrario: la Argentina menemista, 1991-1999. En E. Azcuy Ameghino, *Trincheras en la historia. Historiografía, marxismo y debates* (pp. 215-28). Buenos Aires: Imago Mundi.

- Barsky, O. (1997). La información estadística y las visiones sobre la estructura agraria pampeana. En O. Barsky, y A. Pucciarelli (eds.), *El agro pampeano. El fin de un período* (pp. 13-204). Buenos Aires: Oficina de publicaciones del CBC, Universidad de Buenos Aires.
- Barsky, O., y Pucciarelli, A. (1991). Cambios en el tamaño y el régimen de tenencia de las explotaciones agropecuarias pampeanas. En O. Barsky (ed.), *El desarrollo agropecuario pampeano* (pp. 309-454). Buenos Aires: Grupo editor latinoamericano.
- Basualdo, E. (2001). *Sistema político y modelo de acumulación en la Argentina*. Buenos Aires: UNQ-FLACSO-IDEP.
- Basualdo, E. (2002). Entre la dolarización y la devaluación: la crisis de la convertibilidad en Argentina. *Íconos. Revista de ciencias sociales*, 13, 14-20.
- Basualdo, E. (2003). Las reformas estructurales y el plan de convertibilidad durante la década de los noventa. El auge y la crisis de la valorización financiera. *Realidad económica*, 200, 42-83.
- Basualdo, E. (2006). *Estudios de historia económica argentina. Desde mediados del siglo XX a la actualidad*. Buenos Aires: Siglo XXI.
- Basualdo, E. (2008). El agro pampeano: sustento económico y social del actual conflicto en la Argentina. *Cuadernos del Cendes*, 25(68), 29-54.
- Caligaris, G. (2017a). *Acumulación de capital y sujetos sociales en la producción agraria pampeana (1996-2013)*. Buenos Aires: Facultad de Ciencias Sociales de la UBA - Teseo.
- Caligaris, G. (2017b). Los países productores de materias primas en la unidad mundial de la acumulación de capital: un enfoque alternativo. *Cuadernos de Economía Crítica*, 6, 15-43.
- Castellani, A., y Schorr, M. (2004). Argentina: convertibilidad, crisis de acumulación y disputas en el interior del bloque de poder económico. *Cuadernos del CENDES*, 57, 55-81.
- Castellani, A., y Szkolnik, M. (2011). 'Devaluacionistas' y 'dolarizadores'. La construcción social de las alternativas propuestas por los sectores dominantes ante la crisis de la Convertibilidad. Argentina 1999-2001. *Documentos de investigación social*, 18, 1-21.
- de Palomino, M. (1988). *Tradición y poder: la Sociedad Rural Argentina 1955-1983*. Buenos Aires: CISEA/Grupo editor latinoamericano.
- Dossi, M. (2014). La formación de consensos en las asociaciones empresarias bajo contextos de crisis. El caso de la Unión Industrial Argentina en los períodos 1989-1991 y 1999-2003. *H-Industri@*, 8(13), 161-96.
- Gálvez, E. (2012). La actuación de los grandes terratenientes en las crisis económicas de 1989-1991 y 2001-2002 en Argentina. *Cuadernos del CENDES*, 29(79), 79-96.
- Heredia, M. (2003). Reformas estructurales y renovación de las élites económicas en Argentina: estudio de los portavoces de la tierra y del capital. *Revista mexicana de sociología*, 65(1), 77-115.
- Iñigo Carrera, J. (1998). La acumulación de capital en la Argentina. *XVI Jornadas de Historia Económica*, Quilmes.
- Iñigo Carrera, J. (2005). Argentina: acumulación de capital, formas políticas y la determinación de la clase obrera como sujeto revolucionario. *Razón y Revolución*, 14, 1-17.
- Iñigo Carrera, J. (2007). *La formación económica de la sociedad argentina. Volumen I. Renta agraria, ganancia industrial y deuda externa. 1882-2004*. Buenos Aires: Imago Mundi.
- Lattuada, M. (1994). Una lectura sobre El Nuevo Poder Terrateniente y su significado en la Argentina actual. *Ruralis*, 5, 125-135.
- Merino, G. (2014). El Grupo Productivo y las condiciones económicas de su surgimiento. Genealogía del posneoliberalismo. *Realidad económica*, 288, 22-45.
- Merino, G. (2016). Empresarios y política: Constitución del Grupo Productivo en la Argentina y surgimiento de un nuevo actor político empresarial. *Realidad económica*, 302, 35-63.
- Muro de Nadal, M. (2009). El discurso y la práctica. Las complejas relaciones entre la Sociedad Rural Argentina y el gobierno del Dr. Menem. *Documentos del CIEA*, 4, 185-219.
- Panero, M. (2014). Sectores dominantes del agro y representación política: el caso de la Sociedad Rural Argentina. *Quinto Congreso Uruguayo de Ciencia Política, "¿Qué ciencia política para qué democracia?"*, Montevideo.

- Pérez Trento, N. (2015). La acción política de la Federación Agraria Argentina durante el período de la Convertibilidad (1991-2001). *Mundo agrario*, 16(32), 1-24.
- Pérez Trento, N. (2017a). Del optimismo a la decepción: el rol de la Sociedad Rural Argentina en la implementación y consolidación del neoliberalismo (1989-1994). *H-Industri@*, 12(21), 1-27.
- Pérez Trento, N. (2017b). La crisis ideológica de la clase terrateniente durante el colapso del régimen neoliberal en la Argentina del cambio de siglo. *Pensamiento al margen*, 6, 126-154.
- Pierri, J. (2006). El boom de la soja: ¿un retorno al pasado?. *Realidad económica*, 219, 53-63.
- Pierri, J. (2009). Grandes empresas y cooperativas en el comercio exterior del complejo sojero, 1990-2006. *Documentos del CIEA*, 4, 147-63.
- Salvia, S. (2014a). Asociaciones empresarias del agro y crisis de acumulación, 1998-1999. Un antecedente de la "Mesa de Enlace". *Mundo Agrario*, 15(28), 1-30.
- Salvia, S. (2014b). Empresarios, convertibilidad y crisis. ¿Entre la dolarización y la devaluación?. *Íconos. Revista de ciencias sociales*, 50, 177-193.
- Salvia, S. (2014c). Devaluación sin devaluadores: Consideraciones sobre la disolución de la "comunidad de negocios" y la acción de la burguesía industrial, en la crisis final de la Convertibilidad. *Ciclos en la historia, la economía y la sociedad*, 43, 1-29.
- Salvia, S. (2015). La industria en crisis bajo la convertibilidad. Diagnóstico y demandas de la Unión Industrial Argentina. *H-Industri@*, 17, 92-120.
- Sociedad Rural Argentina (1991). *Anales (junio)*. Buenos Aires, Argentina: SRA.
- Sociedad Rural Argentina (1996). *Anales (agosto)*. Buenos Aires, Argentina: SRA.
- Sociedad Rural Argentina. (1998a). *Anales (febrero)*. Buenos Aires, Argentina: SRA.
- Sociedad Rural Argentina. (1998b). *Anales (marzo)*. Buenos Aires, Argentina: SRA.
- Sociedad Rural Argentina. (1998c). *Anales (junio)*. Buenos Aires, Argentina: SRA.
- Sociedad Rural Argentina. (1998d). *Anales (agosto)*. Buenos Aires, Argentina: SRA.
- Sociedad Rural Argentina. (1998e). *Anales (septiembre)*. Buenos Aires, Argentina: SRA.
- Sociedad Rural Argentina. (1998f). *Anales (diciembre)*. Buenos Aires, Argentina: SRA.
- Sociedad Rural Argentina. (1998g). *Memoria y Balance*. Buenos Aires, Argentina: SRA.
- Sociedad Rural Argentina. (1999a). *Anales (abril)*. Buenos Aires, Argentina: SRA.
- Sociedad Rural Argentina. (1999b). *Anales (mayo)*. Buenos Aires, Argentina: SRA.
- Sociedad Rural Argentina. (1999c). *Anales (junio)*. Buenos Aires, Argentina: SRA.
- Sociedad Rural Argentina. (1999d). *Anales (septiembre)*. Buenos Aires, Argentina: SRA.
- Sociedad Rural Argentina. (1999e). *Anales (octubre)*. Buenos Aires, Argentina: SRA.
- Sociedad Rural Argentina. (1999f). *Anales (noviembre)*. Buenos Aires, Argentina: SRA.
- Sociedad Rural Argentina. (1999g). *Anales (diciembre)*. Buenos Aires, Argentina: SRA.
- Sociedad Rural Argentina. (2000a). *Anales (febrero)*. Buenos Aires, Argentina: SRA.
- Sociedad Rural Argentina. (2000b). *Anales (marzo)*. Buenos Aires, Argentina: SRA.
- Sociedad Rural Argentina. (2000c). *Anales (junio)*. Buenos Aires, Argentina: SRA.
- Sociedad Rural Argentina. (2000d). *Anales (julio)*. Buenos Aires, Argentina: SRA.
- Sociedad Rural Argentina. (2000e). *Anales (agosto)*. Buenos Aires, Argentina: SRA.
- Sociedad Rural Argentina. (2000f). *Anales (octubre)*. Buenos Aires, Argentina: SRA.
- Sociedad Rural Argentina. (2000g). *Anales (diciembre)*. Buenos Aires, Argentina: SRA.
- Sociedad Rural Argentina. (2001a). *Anales (junio)*. Buenos Aires, Argentina: SRA.
- Sociedad Rural Argentina. (2001b). *Anales (septiembre)*. Buenos Aires, Argentina: SRA.
- Sociedad Rural Argentina. (2001c). *Memoria y Balance*. Buenos Aires, Argentina: SRA.

- Sociedad Rural Argentina. (2002a). *Anales (diciembre)*. Buenos Aires, Argentina: SRA.
- Sociedad Rural Argentina. (2002b). *Memoria y Balance*. Buenos Aires, Argentina: SRA.
- Sociedad Rural Argentina. (2008). *Anales (junio)*. Buenos Aires, Argentina: SRA.
- Starosta, G., & Grinberg, N. (2014). From global capital accumulation to Varieties of Centre-Leftism in South America: The Cases of Brazil and Argentina. En N. Grinberg, & G. Starosta, *Crisis and contradiction* (pp. 236-272). Londres: Brill.

NOTAS

- 1 Respecto de los distintos mecanismos de apropiación, véase Iñigo Carrera (2007, pp. 17-22).
- 2 Desde ya, éstas no invalidan la posibilidad de que la personificación del capital y de la propiedad de la tierra puedan hallarse reunidas en un mismo individuo; de hecho, los análisis realizados por de Palomino (1988) y Panero (2014) arrojan que algunos de los dirigentes de la SRA son no sólo propietarios de tierras, sino también de pequeños capitales, usualmente vinculados con la producción agraria.
- 3 “Más allá del cambio de hombres y de las dificultades puntuales que acarrea, a todos nos mueve la confianza en la continuidad de una política económica (...) que, pese a algunos desaciertos (...) ha cambiado el país y ha terminado con la discriminación [de] que históricamente fuera objeto la actividad agropecuaria” (SRA, 1996, p. 3).
- 4 La referencia a los “jueces que quieren investigar sobre derechos humanos” parece apuntar a Baltasar Garzón, magistrado español que hacia 1998 investigaba la participación de oficiales españoles en la causa de los “vuelos de la muerte” producidos durante la última dictadura militar (*La Nación*, 04/04/98).
- 5 Ya a esta altura de la década, la concentración de los capitales exportadores de granos y sus subproductos había avanzado velozmente, desplazando en buena medida a las cooperativas. Al respecto pueden consultarse, para el caso de la soja, los trabajos de Pierri (2006; 2009).
- 6 Un análisis detallado de la organización de este paro en el contexto de la crisis económica puede hallarse en el trabajo de Salvia (2014a).
- 7 Desde la óptica de la SRA, el “costo argentino” está constituido por “salarios, precios de servicios y tarifas muy altas [que] resta[n] competitividad a aquel sector cuya única alternativa de crecimiento es exportar, como ocurre en el agro” (Amar93, p. 11).
- 8 Un análisis sobre la crisis ideológica en que quedaría sumida la SRA hacia el colapso de la Convertibilidad puede hallarse en el trabajo de Pérez Trento (2017b).
- 9 Algunas de estas medidas, cabe destacarse, no llegarían a ponerse en práctica.
- 10 La excepción la constituyó el capital ferroviario, respecto del cual la SRA pareció incluso sugerir, como vimos, la posibilidad de revertir su privatización.